

Sudán: Crímenes de guerra generalizados, muertes de civiles en ataques deliberados e indiscriminados



Desde el inicio del conflicto en Sudán, el 15 de abril de 2023, han muerto y resultado heridas personas civiles, incluso mediante ataques deliberados e indiscriminados. Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) se han enfrentado en barrios residenciales urbanos de la capital, Jartum, y en otros lugares del país, especialmente en la región de Darfur, en el oeste, así como en la región de Kordofán del Norte, en el sur. Algunas de las violaciones cometidas por las partes en conflicto equivalen a crímenes de guerra, que son delitos según el derecho internacional.

Las Fuerzas Armadas Sudanesas, dirigidas por el general Abdel Fattah al-Burhan, jefe del Consejo Soberano de Sudán, y las Fuerzas Armadas Regionales, dirigidas por el general Mohamed Hamdan Dagalo (conocido comúnmente como Hemedti), han luchado por el control de la capital y otras zonas, y sus fuerzas y milicias aliadas han matado y herido a miles de personas. Teniendo en cuenta la magnitud de los combates y la organización de ambos bandos, la situación se califica de conflicto armado no internacional según los Convenios de Ginebra. Como tal, el conflicto se rige por el derecho internacional

humanitario, o las leyes de la guerra, que buscan proteger a los civiles y otros no combatientes en el contexto de un conflicto armado. En el marco del actual conflicto armado en Sudán, Amnistía Internacional considera que tanto las FAS como las FAR son fuerzas estatales. Asimismo, diversos grupos armados no estatales y milicias han participado en el conflicto y en actos de violencia más amplios, en ocasiones aliados a las Fuerzas Armadas Regionales o a las Fuerzas Armadas Sudanesas.

Amnistía Internacional ha realizado investigaciones entre el 15 de abril y el 26 de julio de 2023. La mayoría de las entrevistas fueron realizadas entre el 23 y el 29 de junio de 2023 en campos de refugiados del este de Chad. Otras entrevistas se realizaron a distancia, a través de aplicaciones seguras, con personas de dentro y fuera de Sudán, y algunas se llevaron a cabo en persona en Nairobi y Londres. El 21 de junio de 2023, Amnistía Internacional comunicó sus conclusiones iniciales a los dirigentes de las FAS y de las FAR, que respondieron el 12 y el 14 de julio, respectivamente.

Hombres, mujeres, niños y niñas se ven atrapados en el fuego cruzado, mientras ambos bandos siguen librando una guerra que ya está causando un gran número de víctimas civiles. Los combatientes, especialmente los integrantes de las FAR, se han situado con frecuencia en zonas residenciales densamente pobladas y han lanzado ataques desde ellas, incluso en los alrededores y dentro de viviendas particulares y edificios públicos. Ambas partes deben tomar precauciones de forma urgente para proteger a la población civil.

En otros incidentes documentados por Amnistía Internacional, personas civiles murieron o resultaron heridas deliberadamente en ataques selectivos. En estos incidentes, los sobrevivientes y otros testigos identificaron como autores a miembros armados de las FAR y milicias aliadas. Tanto las Fuerzas Armadas Sudanesas como las Fuerzas de Apoyo Rápido han mostrado un desprecio absoluto por los principios fundamentales del derecho internacional humanitario, que prohíben atacar deliberadamente a civiles y prohíben los ataques que no distinguen entre civiles y combatientes y entre objetivos civiles y militares.

Decenas de mujeres y niñas (de hasta 12 años) han sido secuestradas y sometidas a violencia sexual - incluida la violación- por miembros de los bandos enfrentados en la capital y sus alrededores y en la región de Darfur. Amnistía Internacional también ha recibido informes fidedignos de que algunas mujeres han permanecido recluidas durante días en condiciones de esclavitud sexual. En la mayoría de los casos de violencia sexual documentados por Amnistía Internacional, las sobrevivientes identificaron como autores a miembros de las FAR o de milicias aliadas. Además, la mayoría de las agresiones registradas se produjeron en zonas controladas por las FAR. En otros pocos casos los autores fueron presuntos miembros de las FAS o personas desconocidas.

Según los residentes, los combatientes, en su mayoría de las FAR, se dedicaron al saqueo generalizado de viviendas, comercios e instituciones públicas, incluidos hospitales, almacenes de organizaciones humanitarias y bancos, en la capital y en la región de Darfur. Varios entrevistados relataron que habían sido obligados a abandonar sus hogares por personas a las que identificaron como miembros de las FAR, que posteriormente saquearon y destrozaron sus residencias. En otros casos, los residentes describieron saqueos, incluso por parte de civiles, en zonas controladas por las FAS y las FAR.

Esta nueva escalada de violencia en Sudán coincide con el vigésimo aniversario del conflicto de Darfur, que a lo largo de los años ha causado un inmenso sufrimiento humano en la región. El 15 de abril de 2023, poco después del estallido de violencia en Jartum, el conflicto se extendió rápidamente a pueblos y ciudades clave de Darfur, como El Fashir, en Darfur del Norte, Nyala, en Darfur del Sur, El Geneina, en

Darfur del Oeste, y Zalingei, en Darfur Central. A medida que el conflicto continúa en la región, se ha informado de la participación de más milicias y grupos armados, algunos de ellos aliados de las FAR. Estos grupos, a veces con el apoyo de las FAR, han atacado a civiles por motivos étnicos, con algunas de las características de los crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en Darfur desde 2003.

A pesar de las múltiples declaraciones de alto el fuego desde el 15 de abril, los combates han continuado y se han intensificado. Según la ONU, al 23 de julio de 2023 más de 2,6 millones de personas habían sido desplazadas internamente y más de 750.000 habían cruzado a países vecinos, la mayoría a Chad, Egipto y Sudán del Sur. Entre los desplazados hay refugiados de otros países, especialmente Etiopía, Eritrea y Sudán del Sur, que habían buscado refugio en Sudán.

Los socios regionales de Sudán, y la comunidad internacional en general, deben actuar con rapidez y determinación para responder a las violaciones masivas que se han cometido e impedir nuevas atrocidades. En particular, el Consejo de Seguridad de la ONU debe ampliar rápidamente el embargo de armas que se aplica actualmente en Darfur a todo Sudán y garantizar su cumplimiento. El Consejo debe considerar también la posibilidad de reformular el mandato de la Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS) para que pueda responder con eficacia a la situación actual, en particular proporcionando el personal y los recursos necesarios para garantizar la supervisión y la presentación periódicas de informes sobre derechos humanos, incluidos asesores sobre protección de la infancia y cuestiones de género destinados a mejorar la protección y la supervisión en medio del conflicto.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por su parte, debería establecer un mecanismo independiente de investigación y rendición de cuentas que vigile, recopile y conserve pruebas, e informe sobre las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que se hayan producido, y sigan produciéndose, en el contexto del conflicto. Los Estados parte en la Corte Penal Internacional deben proporcionar recursos adicionales para investigar las violaciones que se están produciendo en la región de Darfur.

Por último, los países deben aumentar significativamente su apoyo a la respuesta humanitaria, abrir sus fronteras y ofrecer vías seguras para garantizar la protección y el apoyo a las personas que huyen de Sudán. Los Estados también deben abstenerse de devolver a nacionales sudaneses a Sudán o a cualquier otro país donde puedan correr el riesgo de ser devueltos a Sudán.

Hasta la fecha, la respuesta internacional al conflicto de Sudán no ha estado a la altura de la magnitud y la urgencia de la situación. En Darfur la espiral de violencia está haciendo temer que se repita la campaña de tierra arrasada de décadas pasadas, y la escalada de violaciones en Jartum y en otras partes del país está poniendo en peligro a un número cada vez mayor de civiles.

Para acceder al informe completo “La muerte vino a nuestra casa. Crímenes de guerra y sufrimiento de civiles en Sudán” (sólo disponible en idioma inglés), puede ingresar [aquí](#).

